

¿Qué será del cambio?

Los trabajadores europeos, más familiarizados con los gobiernos socialistas, saben por experiencia que las primeras medidas y los primeros gestos de éstos les están destinados. Es algo así como el reconocimiento de que han llegado al gobierno gracias a sus votos. Sólo después de las primeras semanas o meses empieza la cantinela sobre la austeridad, la seguridad del Estado, los intereses de la patria, etc., y la evidencia de una política de conciliación con la burguesía y el imperialismo. El flamante gobierno del PSOE no ha querido sumarse a esta tradición: sus primeros gestos y sus primeras medidas han tenido como destinatarios a la derecha y a los poderes fácticos. Aunque éstos han hecho lo que han podido para que los socialistas no ganaran las elecciones.

F. Cruells

EL triunfo electoral del PSOE ha sido el resultado de la voluntad de cambio de amplísimos sectores de la población, que han considerado que votar a este partido era la mejor manera de echar a la derecha del gobierno. Sólo esta voluntad permite explicar el tremendo efecto del voto útil entre la izquierda y la gran cantidad de votos ganados a la abstención que han ido a parar al PSOE. Para una parte de los votantes ha pesado el "miedo a Fraga", que aparecía como la única alternativa con posibilidades frente al PSOE, dada la descomposición de UCD; pero este voto a la contra, es incapaz de explicar por sí solo el impresionante triunfo del PSOE.

La gran mayoría de los diez millones de votantes del PSOE han apoyado el cambio que prometía este partido, que se expresaba en un programa extraordinariamente moderado. No han creído que fuera posible más de lo que prometía Felipe González en la campaña electoral, al menos para empezar. Este posibilismo es el resultado de cinco años de retroceso, división y derrotas del movimiento obrero. Pero no se trata de un cheque en blanco al gobierno socialista. Y es, desde luego, un estado de ánimo que puede ser modificado sobre la base de ir adquiriendo confianza en las propias fuerzas, en el curso de los próximos combates.

La legitimidad democrática de estos diez millones de votos y la holgada mayoría absoluta en el Parlamento y el Senado, van a constituir la fuerza del gobierno del PSOE. Su talón de Aquiles lo constituirá la política de consenso con las instituciones no parlamentarias del Estado: las FAS, la policía, el aparato administrativo y judicial. En ellas la derecha, la reacción y el golpismo cuentan con apoyos fundamentales.

La reacción de la derecha

La burguesía ha salido de estas elecciones con una importante derrota política. Sus partidos están fuera del gobierno central por primera vez en más de cuarenta años. No controlan la mayoría de los grandes ayuntamientos, sólo los gobiernos nacionales de Catalunya y Euskadi, en manos respectivamente de CIU y PNV, y el gobierno de Galicia controlado por

AP, contradicen esta barrida de la derecha de los órganos de gobierno.

Esta mala situación de la burguesía no debe confundirse con una falta de capacidad de reacción y de contraofensiva, ni llevar a una subestimación de sus posibilidades. Su poder económico permanece intacto. Se ha producido una concentración política de la burguesía centralista alrededor de AP, que cuenta con un grupo parlamentario muy fuerte. Existen poderosas organizaciones patronales, como la CEOE, rodadas en la lucha social y política, que cuentan con algunos destacamentos de choque, capaces de movilizar a sectores de masas, como la CECE. Esta movilización se puede ampliar con colectivos como el Consejo General de Médicos y, lo que es más importante, en algunos aspectos como la enseñanza privada, la "protección a la familia" y el aborto, va a contar con la participación activa de la Iglesia.

Como consecuencia de la legitimidad popular con que el PSOE inicia su mandato, es probable que la contraofensiva de la derecha presente dos fases relativamente diferenciadas. En una primera fase, la táctica dominante consistirá en aprovechar las propuestas de concertación del gobierno PSOE para plantear sus propias exigencias, tratando de establecer una serie de concesiones que establezcan un cercos a las posibles medidas del PSOE (el documento económico que la CEOE presentó al gobierno es un ejemplo típico de esta táctica). Sin embargo, en una segunda fase, asistiremos a la transformación, desigual pero progresiva, del cercos en hostigamiento y posterior movilización contra el gobierno socialista. Aunque no se tratará de dos fases nítidamente separadas (ahí está la propuesta de acciones patronales "antiterroristas" de Olarra), ni vamos a conocer una actitud homogénea del conjunto de la derecha. Van a existir diferencias entre las organizaciones sociales y políticas (Fraga habló de sangre en la sesión de investidura, mientras Ferrer Salat combina la extrema dureza en la negociación con los sindicatos y las buenas formas con el gobierno, entre las distintas organizaciones políticas (por ejemplo, las intervenciones de Roca y Fraga en

el Parlamento) y entre todas éstas y las alternativas extraparlamentarias que seguirán operando en el interior de las FAS.

El objetivo final de esta contraofensiva de la derecha va a ser recuperar el gobierno en sus manos. Porque está convencida de que el PSOE, aunque realizará importantes concesiones, es un instrumento inadecuado para estabilizar el régimen (cuyo precario equilibrio, trabajosamente recompuesto tras el 23-f, exigía ya antes de las elecciones una política cada vez más reaccionaria por parte de UCD) y para desarrollar los ataques en profundidad contra el movimiento de masas que la burguesía cree necesarios.

Dificultades para la maniobra

El freno a la contraofensiva de la burguesía, la derecha y la reacción sólo podría ser la organización y la movilización de masas. Pero este es el camino que el PSOE no quiere tomar. El fondo de su política, consiste en adecuar las reformas posibles a la concertación con el capitalismo, el aparato de Estado y el imperialismo. Sin embargo, la gravedad de los problemas económicos, sociales, militares e internacionales, limitan extraordinariamente el margen de maniobra entre las exigencias de la derecha y las esperanzas de cambio de amplísimos sectores de la población. Ceder al cerco de la derecha compromete incluso la realización del moderado programa del PSOE, con el riesgo de debilitar rápidamente el apoyo popular que le ha llevado al gobierno.

La política inmediata del PSOE va a consistir en buscar las medidas que permitan retrasar el estallido de esta contradicción. Y un primer objetivo consiste en llegar a las elecciones municipales y autonómicas sin un desgaste importante, a fin de consolidar su victoria electoral. Por eso es previsible que intente aplazar para después de las mismas, tanto las medidas mas impopulares cara a los trabajadores (en particular, en el terreno de la austeridad), como aquellas en que la derecha ha anunciado ya su dureza en la confrontación (Estatuto de centros, aborto, etc.). Pero aplazar las contradicciones durante unos meses, no significa eliminarlas. Y las que esperan al gobierno del PSOE no son precisamente pequeñas. Para comprobarlo basta con repasar algunos problemas claves.

Eso que se llama el excedente

El programa electoral del PSOE en el terreno económico se proponía una racionalización del sistema capitalista a través de una doble concertación. La banca y la patronal debían colaborar en la inversión productiva a cambio de que se les garantizara "eso que se llama el excedente", o sea, la explotación de los trabajadores por los capitalistas. Los sindicatos debían lograr que los trabajadores accedieran a "compartir el mendrugo", para evitar que siguiera la marcha atrás y pudiera emprenderse una recuperación. Esta consistiría en disminuir el paro (creando 800.000 nuevos puestos de trabajo, en cuatro años) y obtener una serie de mejoras en sanidad, seguridad social, enseñanza, medio

ambiente, derechos sindicales, etc; la contrapartida debía ser que los salarios no crecieran más que la inflación que programara (y controlara) el gobierno.

Sin embargo, las primeras medidas del gobierno socialista han supuesto ya un jarro de agua fría sobre tan moderadas promesas. En el debate de investidura Felipe González anunció que reduciría el déficit del Estado. Lo cual, en ausencia de nuevos ingresos, significa una reducción de gastos, que no parece probable que afecte a los gastos militares o a las subvenciones a la enseñanza privada, sino a las remuneraciones de los funcionarios, a las prestaciones sociales y a la inversión pública. Es decir, la reducción del déficit llevará a un aplazamiento de las moderadas contrapartidas del PSOE.

Felipe González anunció también que el gobierno pensaba programar una inflación del 12%. Esta cifra es la que va a determinar los aumentos de las pensiones, los salarios de los funcionarios y la que los sindicatos van a manejar en la negociación colectiva. Pero el gobierno del PSOE no parece que vaya a ser más consecuente que el de UCD a la hora de respetar la inflación programada: la subida del 20% en la gasolina y los demás derivados del petróleo, además de afectar directamente la economía de los trabajadores, actúa como desencadenante de un aumento general de precios (transporte, teléfono, electricidad...), que hace poco creíble el tope del 12% y conducirá a una nueva disminución del poder adquisitivo de los salarios (devaluados ya en un 15% por la inflación de 1982).

A pesar de las dos medidas anteriores, el gobierno socialista pretende que la economía puede crecer un 2,5% en 1983. Descartado el aumento del gasto público y del consumo de los trabajadores, este crecimiento sólo puede producirse por una expansión de las exportaciones o por un incremento de la inversión productiva privada, extraordinariamente improbables a causa de la crisis.

Pero lo significativo es que, en el propio discurso de investidura, Felipe González redujo los objetivos de creación de empleo para el primer año de su mandato, al anunciar que el paro disminuirá sólo en 0,5 puntos (65.000 parados), en lugar de los 200.000 de promedio). Más grave todavía: según las cifras del gobierno es más que probable que el paro aumente en lugar de disminuir. En efecto, el crecimiento del empleo es la diferencia entre el crecimiento económico y el de la productividad (expresados en 9). En los últimos años esta última ha crecido por encima del 3% y es probable que en el próximo supere el 2,5%, a pesar de la disminución de la jornada a 40 horas semanales. Si esto es así, el crecimiento del empleo será negativo, o sea, el paro continuará aumentando.

Si las medidas lesivas para los trabajadores no se han hecho esperar, las favorables, incluso las elementales, son aplazadas de un Consejo de Ministros a otro. Los proyectos de ley sobre la jornada de 40 horas y el mínimo de 30 días de vacaciones, solo se han mandado a las Cortes en vísperas de Navidad. La jubilación anticipada, el aumento del salario mínimo y la devolución del patrimonio sindical



siguen esperando después de un mes de gobierno socialista. La reforma de la Ley Básica de Empleo no se abordará hasta entrado el año 83.

La moderación socialista y los recortes a su propio programa no son, sin embargo, suficientes para contentar a la patronal. Las posiciones de ésta en la negociación colectiva van a ser duras y continuarán las presiones al gobierno para que realice un auténtico plan de estabilización, que es la medida que los capitalistas consideran más adecuada para hacer frente a la situación actual. Miguel Boyer ha declarado ya que será una medida inevitable si fracasa la lucha contra la inflación. Pero las posibles nuevas concesiones del PSOE, serán consideradas por el capital sólo como un episodio más de su lucha contra el gobierno socialista, porque el tipo de soluciones que necesita exige recuperar el gobierno para la derecha y proceder a ataques en profundidad contra los trabajadores, del tipo de los que se contemplaban en el programa electoral de AP.

"Queremos que nos conozca"

Esta es la frase que el general Pedrosa, jefe de la

DAC Brunete dirigió a Felipe González. La prensa habló de éxito personal del Presidente y ha especulado con que Felipe podía conseguir de los militares lo que no consiguieron los gobiernos de la derecha. Pero esto es sólo una cortina de humo sobre lo que todo el mundo sabe de la situación de las FAS. Los pocos militares demócratas se sienten acorralados y van tirando la toalla. La inmensa mayoría de los jefes y oficiales están convencidos de la necesidad de intervenir directamente en política para "salvar a la patria", más tarde o más temprano. Todos sus componentes están sometidos, desde dentro y desde fuera, a una intensa agitación golpista que ha demostrado su efectividad. La sentencia blanda del 23-F ha operado como un salvoconducto para la conspiración. La trama operativa de los coroneles sigue sin desmontar y se ha ido perfeccionando desde el 23-F. La mayoría de la jerarquía militar no ha renunciado a imponer una salida política basada en un gobierno cívico-militar. La conclusión evidente, es que las FAS constituyen uno de los peligros más importantes para el gobierno

socialista, lo cual no significa que no se haya producido una remodelación de su táctica frente al mismo.

La jerarquía militar es consciente de que debe tener en cuenta los resultados de las elecciones. Por eso sus objetivos inmediatos son el mantenimiento de unos jefes militares representativos del sentir general y una autonomía en los asuntos internos de las FAS: destinos, formación, castigos, etc. Será esta autonomía la que les permitirá presionar eficazmente para que se adopten determinadas medidas políticas en temas como terrorismo, autonomías, política atlantista, etc, al tiempo que les garantizará controlar los resortes de otra presión no menos efectiva: la del chantaje golpista.

La frase del general Pedrosa también puede interpretarse de otra manera: queremos que conozca nuestras condiciones. Esta interpretación menos literal, permitiría explicar mejor el talante de alféreces provisionales que adoptan Felipe y Serra en los actos militares, su fervor de conversos recientes cuando se refieren a los "valores tradicionales de nuestros ejércitos" y la sorprendente lentitud en la toma de decisiones militares, distintas del precontrato FACA. A estas alturas parece totalmente fantasioso atribuir al PSOE, tal como hacía una revista en vísperas de las elecciones, un "plan de impermeabilización" de las FAS, consistente en remover toda la estructura jerárquica y colocar a 500 jefes constitucionalistas en los puestos de máxima responsabilidad. La opción del PSOE parece consistir en un pacto con la jerarquía militar, por el que ésta acepte una serie de reformas menores, a cambio de garantizarle jefes representativos (aunque pactados) y autonomía interna. Si esta es la solución finalmente adoptada, significará la renuncia a desactivar la conspiración golpista —en especial el golpe de los coroneles— y limitarse a tratar de "convencer" a una jerarquía que ya conspiraba para imponer sus propias soluciones cuando la derecha estaba en el poder. Los nombramientos de nuevos jefes militares y la revisión del proceso del 23-F, serán algunos de los primeros gestos importantes sobre la política militar del PSOE.

Seguiremos contando con Ballesteros

Esto ha declarado el flamante ministro Barrionuevo en el acto de presentación de los nuevos cargos policiales, en los que ha buscado un "equilibrio entre la eficacia y la continuidad". La idea que tiene el nuevo ministro de la eficacia se puede deducir de su calificación del torturador Ballesteros como un "profesional competente y trabajador", al que ha buscado ya un puesto en el Gabinete de Información y Operaciones Especiales. En lugar de limpiar la policía de torturadores, fascistas y golpistas, el nuevo ministro se limita a cambiar de despacho a los más impresionables. Una simple operación de cirugía estética. Como la del MULC, del que se ha eliminado solamente la dirección específica, para hacerlo depender de la Dirección General del Estado. O con la Ley Antiterrorista, que será refundida en el nuevo Código Penal, a finales de 1983. O con la Audiencia Nacional, que continuará aunque cambien algunas de sus atribuciones.

Esta política va a ser enormemente perjudicial para el propio gobierno socialista. La Administración del

Estado, de la justicia y, muy en particular, los cuerpos policiales son nidos de corrupción, feudos de franquistas y golpistas. No sólo entorpecerán cualquier medida progresista que tome el gobierno, sino que pueden llegar a movilizarse contra él con huelgas o plantes, como la de funcionarios de policía (posteriormente desmentida), en vísperas del 23-F, cuando dimitieron Ballesteros y Dopico. Además, toda una serie de reformas positivas prometidas por el PSOE, pueden ser neutralizadas por la subsistencia de la antigua alta burocracia y de la legislación represiva de la contrarreforma. Por ejemplo, mientras persistan la Ley Antiterrorista, el MULC y no se depure a la policía y a la administración de justicia: ¿qué eficacia pueden tener el habeas corpus o la prohibición de torturas?

Por otra parte, la disposición al compromiso con los burócratas de los altos cuerpos de la administración, se convierte en estúpida afirmación de autoridad cuando se trata de los funcionarios de a pie, simples trabajadores de la administración, que han votado PSOE en buena parte. Por ejemplo, la reducción de las vacaciones de Navidad se ha hecho sin consultar para nada a los sindicatos representativos de los trabajadores. A este paso la prometida reforma de la administración va a ser un fracaso, cuyas consecuencias van a sufrir especialmente estos cientos de miles de asalariados.

La LOAPA y sus interpretaciones

La LOAPA fue un fruto del 23-F y de la contrarreforma. La contradicción del PSOE es que está demasiado comprometido con ella para derogarla, aunque con ella es imposible gobernar en Catalunya y Euzkadi. Se impone, pues, la necesidad de un pacto con el PNV y CiU, que controlan los respectivos gobiernos autónomos. Una parte del posible pacto está ya clara: se trata de transferir con rapidez competencias y dinero a los gobiernos autónomos, y consensuar con los partidos nacionalistas una serie de leyes autonómicas pendientes. Pero sigue quedando el problema de la LOAPA. Los socialistas prometen que "su interpretación" de la misma no desnaturalizará los Estatutos. Sin embargo, los nacionalistas desean lógicamente que las competencias de sus gobiernos no dependan de la interpretación de turno. Ante eso Tomás de la Quadra ha declarado, que si la sentencia del Tribunal Constitucional ofrece una percha suficiente para colgar en ella la LOAPA, podría reconducirse su aplicación mediante el desarrollo consensuado de las distintas leyes autonómicas pendientes.

De todas maneras el pacto con los partidos nacionalistas burgueses será inevitablemente conflictivo. Cualquier concesión del PSOE será objeto de duros ataques por parte de la derecha centralista y la jerarquía militar, a los cuales el PSOE será especialmente sensible. Por otra parte, lo que puede esperar el PSOE del PNV y CiU es una cierta colaboración en el Parlamento central y en el aislamiento del nacionalismo radical vasco. Pero no puede esperar que estos partidos renuncien ni a mantener (o recuperar) la hegemonía en su nacionalidad (a expensas del PSOE), ni a utilizar sus posiciones en los gobiernos autónomos para defender su propio "modelo de sociedad".

En cambio el PSOE parece tener cada día menos voluntad en encontrar una salida para la pacificación de Euzkadi. Las declaraciones de Barrionuevo, diciendo que "no vemos en ETA mas que pura barbarie,

una organización de malhechores", son dignas de Rosón y parecen indicar una voluntad de primar las medidas policiales por encima de las políticas, tal como han hecho los distintos gobiernos de UCD. No se ha dado ningún paso para adoptar una serie de medidas políticas parciales, reclamadas por sectores muy importantes del pueblo vasco, que posibilitarían una negociación con ETA sobre la pacificación de Euskadi y abrir alguna vía para abordar las cuestiones de fondo, que son las que explican la existencia de ETA, del nacionalismo radical y de su apoyo por parte de importantísimos sectores.

¿Hasta cuando los juicios por aborto?

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Manuel Góngora a doce años de cárcel por dos abortos provocados en 1968 y aprovechó la sentencia para criticar la actual legislación. Pero Felipe González, en su entrevista a "El País" del 12 de diciembre, se negó a dar ningún calendario sobre la prometeda ley sobre el aborto terapéutico. No es difícil comprender las razones de este silencio. Las primeras manifestaciones de masas de advertencia al gobierno socialista fueron las que organizó la Iglesia con motivo de la visita del Papa, aunque Felipe González no había sido investido todavía. Desde entonces es notorio que la Iglesia, que en otros terrenos puede optar por un discreto segundo término, ya a volcar toda su influencia en la defensa de "la familia y el derecho a la vida", así como de la enseñanza privada y de las clases de religión en la escuela pública. El PSOE trata de retrasar y de atenuar estas confrontaciones con el frente único de la derecha y la reacción, al que se ha sumado ya el propio Rey en su discurso de Navidad, en el que unía el bienestar de España al de la familia patriarcal.

El amigo americano

Después de la visita de Shultz, que congregó 5.000 manifestantes anti-OTAN en Madrid, el gobierno anunció que antes del 21 de mayo, fecha en que se agota el anterior convenio con los USA, se habría firmado un protocolo anexo al Convenio negociado por UCD. Sabemos, pues, que seguirán las bases americanas. En cuanto a la OTAN, se ha detenido la integración en la estructura militar y se mantiene la promesa de convocar un referendun, aunque Morán ha dicho que "no consideremos que sea un tema en el que debemos precipitarnos, creando tensiones internas o internacionales". Pero es posible que las tensiones y las presiones a precipitarse lleguen por parte del Ejército, de la derecha y del imperialismo. Fraga ha recordado ya que para modernizar el Ejército hay que estar en la OTAN y ha considerado la decisión de congelar la integración en la estructura militar como el primer triunfo de Andropov. Hassan de Marruecos ha anunciado que en enero reclamará las plazas coloniales de Ceuta y Melilla, lo cual puede poner en aprietos al gobierno del PSOE, que tiene una posición colonialista respecto a las mismas y ha dado a entender que las podría considerar una contrapartida (junto a Gibraltar) de la permanencia en la OTAN. Por otra parte, el imperialismo americano ha iniciado ya fuertes presiones políticas para evitar la salida de la OTAN de su aliado y no dudará en recurrir también a las presiones económicas, que pueden resultar especialmente efectivas, incluso a corto plazo, dada la situación de la balanza de pagos y la cuantiosa deuda externa del Estado español.

Aplazar la fecha del referendun es, de nuevo, una forma de retrasar el estallido de la contradicción. En ningún caso se trata de una solución al problema.

¿Después de las municipales, qué?

Esta política del gobierno socialista de intentar aplazar las principales contradicciones, puede prolongarse hasta las elecciones municipales, pero no puede durar indefinidamente. Un mes después de la constitución del gobierno, puede ya decirse que algunas de las más importantes promesas electorales están en entredicho. Esto no significa que este gobierno pueda permitirse olvidar todas sus promesas de cambio y desarrollar una política similar a la de UCD. Porque, si bien es verdad que intenta evitar cualquier enfrentamiento importante con el capitalismo, el régimen de la reforma o el imperialismo, también lo es que su posibilidad de permanencia en el gobierno depende de que siga suscitando el apoyo electoral de una gran mayoría de trabajadores.

Para mantener este apoyo, el PSOE parece confiar en la coincidencia de varias circunstancias favorables. En el terreno económico, su esperanza confesada es que la economía capitalista mundial se reactive en 1984 y permita unos mayores índices de crecimiento en el Estado español. Pero es sumamente problemático que esta reactivación sea cualitativamente distinta de las últimas (o sea, que signifique la salida de la onda larga depresiva) y que el crecimiento económico capitalista permita reducir el número de parados conforme a las promesas, en lugar de seguir aumentándolos. En el terreno nacional, la apuesta socialista se basa en que un pacto con los nacionalistas burgueses, el desarrollo de los Estatutos y la creación de frentes antiterroristas, permitan reducir la base de masas del nacionalismo radical y aislar a ETA, hasta convertirla en un simple problema policial. En este caso el error de previsión es doble: que se pueda reducir la base social del nacionalismo radical, sin satisfacer algunas de sus reivindicaciones básicas y que el desarrollo estatutario amortigüe las reivindicaciones nacionales en lugar de abrirles nuevos campos. Si realmente consiguiera éxitos en el terreno del paro, del poder adquisitivo y del terrorismo, el gobierno del PSOE seguramente cree que podría desarrollar una serie de reformas políticas que no provocaran la movilización activa de la derecha, ni la rebelión de los aparatos de Estado y que le permitirían consolidar su influencia electoral entre los trabajadores. Sobre la base de todo ello, el PSOE debe confiar en que podría convencer al imperialismo de la utilidad de un aliado más independiente. Y a los jefes militares, de que no tienen base social para sus aventuras golpistas. Si todo eso fuera posible, el PSOE habría conseguido una "normalización democrática" tan efectiva como la de Gran Bretaña, que dice admirar Fraga, o la de Austria, con la que sueña Felipe.

Desgraciadamente para el PSOE, este cúmulo de circunstancias favorables para su política, tienen una posibilidad de producirse cercana a cero. La crisis económica hace planear el fantasma de la estabilización. El problema nacional va a seguir siendo virulento y con persistencia de las acciones armadas. Los aparatos policial, judicial y administrativo, junto a la legislación represiva ya existente, van a desnaturalizar los tímidos intentos que puedan emprenderse para ampliar las libertades. El imperialismo americano esta en plena carrera armamentista y decidido a disci-



plinar a sus aliados. La derecha está preparando una fuerte contraofensiva y las FAS siguen incubando proyectos de golpe. El espacio para una política reformista es enormemente reducido. Sometido a los ataques de la derecha y la patronal, el movimiento de masas necesitará imperiosamente contar con instrumentos de defensa eficaces y, si el gobierno del PSOE no se demuestra útil para una función de este tipo (como sucederá con toda seguridad), verá como se desvanece el formidable apoyo electoral que le han dado diez millones de ciudadanos.

Esta es la perspectiva para la que, con distintas tácticas, se prepara la derecha.

Las alternativas parlamentarias de la derecha

El objetivo común de la derecha es acelerar el desgaste del PSOE y recuperar el gobierno en sus manos. Pero la crisis de UCD y el espectacular crecimiento de AP no han resuelto la crisis de dirección política de la burguesía.

La opción ampliamente mayoritaria entre la burguesía centralista, ha sido la coalición AP-PDP liderada por Fraga, cuya estrategia va a consistir en un hostigamiento y una movilización bastante frontal contra el gobierno del PSOE, como anunció claramente la intervención de Fraga en la sesión de investidura, su apoyo a las propuestas de acción directa antiterrorista hechas por Olarra, sus anuncios de movilización contra el aborto, etc, etc.

Sin embargo, existen fuertes dudas entre la burguesía y los políticos de derecha, de que una alternativa tan reaccionaria como la representada por AP, sea capaz de derrotar electoralmente al PSOE. La propia CEOE, que tan explícitamente apoyó a Fraga en la pasada campaña electoral, le advirtió que su techo estaba entre los cinco y los seis millones de

votos. Políticos como Miquel Roca, consideran que unos dos millones de votos "centristas" han ido a parar al PSOE. Se constata que la voladura controlada de UCD para construir una opción de derecha reaccionaria, en la que se sintiera cómoda una mayoría de la burguesía centralista y sectores importante de fuerzas reaccionarias como las FAS, la Iglesia, etc, no sólo no ha permitido a la derecha ganar las pasadas elecciones, sino que existen serias dudas de que esta táctica permita ganar las siguientes. Es probable que, incluso con un gobierno socialista desgastado, si no existe una derrota profunda del movimiento obrero y los movimientos nacionales, el "voto útil contra Fraga" tenga la suficiente envergadura para impedir una victoria electoral de una coalición hegemónica por éste. Esta constatación es la que alienta la lucha del PDP para adquirir mayor protagonismo en la coalición con AP y el surgimiento de proyectos de un "nuevo centrismo".

Después de la definición democristiana de UCD, parece abierta la posibilidad de una fusión con el PDP, que permitiría una coalición más equilibrada con AP y una imagen más productiva electoralmente. Sin embargo, existen importantes dificultades derivadas de la persistencia de otras corrientes dentro de UCD y de los deseos de AP de seguir manteniendo una hegemonía absoluta en la coalición, que se expresa en las condiciones draconianas que exige a UCD para una alianza municipal.

Otras opciones de derecha, creen que sólo es posible capitalizar electoralmente el probable desgaste de los socialistas, con una alternativa que se presente claramente diferenciada de Fraga. Construir la exige una combinación de acuerdos conflictivos y hostigamiento selectivo al gobierno del PSOE. Variantes de estas opciones son las que presentan grupúsculos como el CDS y los partidos nacionalistas burgueses

PNV y CiU. Estos últimos, hasta el momento, se han preocupado sólo de asegurar su hegemonía en la nacionalidad. Pero después de la desaparición del "centrismo estatal", Miquel Roca ha avanzado la idea de impulsar una federación de partidos de centro, cuyos puntales deberían ser el PNV y CiU, pero que deberían atraerse o crear otros partidos regionales.

En definitiva, el ascenso de AP no ha conducido a una reorganización política de la burguesía suficientemente satisfactoria. No resulta tarea fácil compaginar la construcción de una alternativa burguesa reaccionaria, que realice importantes concesiones a la jerarquía militar y otros poderes fácticos, con la necesidad de recuperar el gobierno por métodos parlamentarios, ganando unas elecciones, que es la opción que defiende la mayoría de la burguesía y sus organizaciones políticas (incluida AP).

Y las alternativas militares

Esta última constatación no debe considerarse inmutable. El fracaso de las alternativas parlamentarias en el futuro, podría lanzar fácilmente a la mayoría de AP y de su base social a preconizar una solución militar, a la que han sido tradicionalmente proclives los dirigentes de AP y para las que ideológicamente su base está bien preparada. Por otro lado, las alternativas extraparlamentarias no son el fruto mecánico de la voluntad burguesa mayoritaria o de los planes de los principales partidos de derecha. Es perfectamente posible, por ejemplo, que en un momento más avanzado del proceso, la jerarquía militar decidiera forzar un gobierno cívico-militar, pensando que no existirían excesivas dificultades para transformar la base social de AP en base propia. Esta posibilidad existe, porque las alternativas extraparlamentarias siguen operando dentro de las FAS y con una relativa autonomía.

Por el especial activismo de sus promotores, cuya última intencional práctica se remonta sólo a Octubre de 1982, es necesario considerar el llamado "golpe de los coroneles", en absoluto desarticulado y cuyo proyecto es una dictadura militar fascista. Su fuerza deriva de la impunidad con que conspira en las FAS, pero cuenta con una exigua base social (de la cual es un índice el fracaso electoral de Solidaridad Española y Fuerza Nueva, constatado incluso en zonas de viviendas militares) y la dificultad de poder contar con la cobertura del Rey. Sin embargo, la importancia de los efectivos militares que ha demostrado movilizar, sería suicida descartar la posibilidad de éxito en sus propósitos, o bien que su acción fuera el pretexto para una reconducción hacia soluciones pseudoconstitucionales, por parte de la jerarquía militar.

Pese a su discreción después del triunfo del PSOE, ningún dato permite suponer que ésta última haya abandonado su arraigada desconfianza en las vías parlamentarias, ni su viejo proyecto de gobierno cívico-militar con formas pseudoconstitucionales. Sin embargo, el triunfo socialista crea, en lo inmediato, peores condiciones desde el punto de vista de la base social e incluso de la justificación "constitucional", dada la aplastante mayoría del PSOE. Por otra parte, la hegemonía de AP entre las fuerzas de derecha permite una mayor identificación con su proyecto político y presiona a dar un nuevo margen a la estrategia parlamentaria de la derecha.

Los proyectos de la derecha centralista agrupada en torno a AP y los de la jerarquía militar, si bien no

son coincidentes, tienen importantes elementos de convergencia e influencia mutua. Por un lado, no existen contradicciones flagrantes en los objetivos programáticos, aunque las distintas formas de acceso al poder (parlamentariamente o por un golpe "blando") conducirían a resultados finales bastante distintos; en efecto, existiría la tendencia de todo gobierno cívico-militar a transformarse en dictadura, para hacer frente a la resistencia que suscitaría y por el mayor protagonismo que podría tener el importante sector "duro" de las FAS. Por otro lado, la derecha centralista y la jerarquía militar están obligadas a hacerse concesiones mutuas. La primera, a fin de compensar su debilidad en las instituciones parlamentarias con sólidos apoyos en los aparatos de Estado y para asegurar un equilibrio del régimen si accediera al gobierno. La jerarquía militar, porque mantiene estrechos lazos con el gran capital y la derecha centralista, estando obligada a tomar en cuenta sus intereses políticos y a valorar si podría contar con una base social suficiente para una solución militar.

Un vacío a la izquierda

El repaso a las distintas alternativas de la derecha permite pensar que si ésta accediera al gobierno como resultado de la combinación de un desgaste del PSOE y una desmoralización del movimiento de masas, los ataques a que debería hacer frente este último, incluso en la variante más favorable, serían mucho más importantes que en la última época de UCD. Pero desgraciadamente el triunfo del PSOE no permite descartar el peligro de alternativas golpistas, cuyas consecuencias serían mucho más dramáticas para el movimiento de masas.

Estas malas perspectivas no son inevitables. La victoria electoral del PSOE ha creado mejores condiciones para el desarrollo del movimiento de masas. Ya que, si por un lado existe una indudable confianza en el gobierno e incluso, en una primera fase, una espera de las medidas que pueda tomar, también ha aparecido la voluntad de obtener una serie de conquistas parciales frente a la derecha y la patronal. Si el gobierno del PSOE no es capaz de dar satisfacción a estas reivindicaciones, como ocurrirá con toda probabilidad, la necesidad de la movilización contra la derecha y el capital se puede abrir camino progresivamente y, paralelamente, puede cobrar cuerpo la desconfianza hacia la política reformista del PSOE y la necesidad de una alternativa revolucionaria. Esta recomposición del movimiento de masas, el aumento de la movilización, la organización y la conciencia, puede ser el único dique efectivo contra los planes de la derecha y de la reacción.

Sin embargo, existe el peso del reflujo anterior. Las organizaciones populares están debilitadas y divididas. Los partidos y sindicatos mayoritarios no van a empujar en esa dirección. Remontar la situación va a exigir la construcción de una vía y de una dirección alternativas al reformismo, no sólo del PSOE, sino también del PCE. La necesidad de cubrir este vacío a la izquierda se va a abrir camino progresivamente entre los mejores luchadores. Este cambio en las conciencias no será la menor de las consecuencias del triunfo socialista. De su profundidad va a depender que no se frustren las esperanzas de cambio que permitieron derrotar a la derecha en las pasadas elecciones.

7 de enero de 1983